

VIII

EL MONTTVARISMO Y LA FUSION

El conflicto de 1857 dejaba deslindados a los partidos bajo un aspecto enteramente nuevo. Los antiguos pelucones habían pasado a la historia, por la separación de sus elementos clericales y sus elementos laicos. Los primeros, entonces los más numerosos, sin duda alguna, formaron el nuevo partido conservador cuya actitud clerical fué poco a poco acentuándose, a medida que perdía el antiguo criterio de Portales; los conservadores laicos a su vez formaron el partido nacional, apellidado monttvarista del nombre de sus dos principales jefes: don Manuel Montt, Presidente de la República, y don Antonio Varas, su ministro.

En cuanto a los conservadores, las pasiones y los intereses religiosos los absorbieron desde el primer momento, hasta el punto de que la venerable tradición de gobierno, que con tanta gloria y fortuna habían contribuído a cimentar, fué relegada a segundo término, y olvidada definitivamente en plazo no lejano, para adoptar por último tendencias enteramente opuestas en política.

Los conservadores, al perder su antiguo y noble espíritu, se convirtieron en simples aliados del clero, el cual, en su

gran mayoría y siguiendo las inspiraciones de su arzobispo, quedó enrolado en el nuevo partido. Esta circunstancia debía traer para los intereses religiosos daños gravísimos, como lo comprendieron desde luego los espíritus previsores, y en los partidos una perturbación que aún ahora parece incurable.

Vamos a permitirnos algunas observaciones sobre estos dos puntos importantísimos.

Indudablemente el clero, afiliado en masa o como corporación dentro de una fracción política, predicando desde los púlpitos que no hay salvación para sus adversarios, interviniendo en las luchas agrias, personales y ardientes de los comicios electorales, no sólo rebaja la dignidad de su santo ministerio, sino que quebranta a sus propias creencias suscitándoles enemigos, y reduciendo a la religión a las mezquinas proporciones de un programa político de lucha y de división, cuando debía ser, por el contrario, un dulce lazo de unión entre todos los ciudadanos.

La fe ilustrada y convencida, no es tampoco, por desgracia, un privilegio que alcance a la mayoría de los hombres. Los más deben su creencia, más que a estudios y reflexiones profundas, a las tradiciones siempre sólidas y a las duraderas enseñanzas de la niñez. No puede exigirse al pueblo, sobre todo, mucho más que esto. Ahora bien, si la fe se lleva a los clubes electorales y a las luchas de la política, es natural suponer que junto a sus apóstoles se levanten otros apóstoles, a quienes los intereses de partido impulsen a destruir la obra con que se les combate. La religión poco tiene que ganar y mucho que perder en semejante guerra.

Póngase delante de un hombre ignorante, a un sacerdote que le predica verdades austeras que no es capaz de alcanzar a comprender en toda su sublimidad, pero cuya grandeza siente; que habla un lenguaje severo y sentencioso, y cuyos hábitos y cuya vida forman contraste con la vida y las pasiones humanas, y, probablemente, la obra

evangélica alcanzará sus frutos de morigeración y salvación. Pero si se suscita al lado de ese sacerdote, un hombre del siglo, que conoce el lenguaje de las pasiones, que maneja la sátira y el escarnio, que posee el arte demasiado fácil de convertir en ridículo lo sublime, entonces el catecúmeno correrá peligro, y, acaso, se burle muy pronto de lo que un momento antes respetaba.

Esta clase de apóstoles les ha suscitado a millares la intervención del clero en la política. El librepensamiento se hizo propagandista, demasiado eficaz por desgracia, y, muchos viéndose heridos en sus afecciones y en sus intereses en nombre de la fe y por obra del clero, acabaron por romper con la una y con el otro. No impunemente se cambia un instrumento de caridad en un instrumento de guerra; la experiencia nos lo ha mostrado, y gracias a un error tan lamentable, hoy es la irreligión un arma política tan fecunda como lo fué en otro tiempo la religión: a nadie ataco, me limito a recordar hechos.

Por eso un ilustre político contemporáneo decía no ha muchos años en nuestro Congreso que consideraba tan culpable poner a la religión en todas partes para defenderla, como ponerla en todas partes para atacarla. (1).

Si las cuestiones teológicas perjudican a las creencias, sus efectos no son menos deplorables en el orden político. Los problemas que se relacionan con la religión, forman por su número una muy pequeña parte de los que pueden suscitarse en la vida de un pueblo. Ahora bien, si los partidos se fundan en doctrinas más o menos exclusivamente teológicas, como ha sucedido en Chile en los últimos años, los grandes intereses nacionales corren peligro de ser olvidados en nombre de la desunión y las pasiones originadas por doctrinas de tardía y lejana aplicación. Al examinar el actual caos de nuestros partidos tendremos ocasión de analizar este punto.

(1) Don Pedro Montt, Ministro del Interior. Año 1893.

A la triste y lamentable transformación de una parte del gran partido conservador, en partido teológico, respondió la formación del partido nacional con los elementos que habían permanecido adictos al Presidente Montt. No eran estos elementos, por cierto, bastante poderosos para perpetuar durante largo tiempo su dominación. Se componían de algunos pelucones, menos devotos o más dóciles que los que tan bruscamente se habían separado, de los funcionarios administrativos, y de cierto número de hombres nuevos, inteligentes, activos y laboriosos que Montt había levantado e introducido en la política, como auxiliares de su fecunda obra administrativa.

En tales condiciones el partido monttvarista debía ser más que una agrupación de principios, una pasión personal, cuyo sentimiento dominante era su adhesión sin límites al Presidente de la República. Además de eso, y por de pronto continuó las tradiciones políticas y administrativas de los pelucones, siendo de notar que, como carecía de la fuerza que daba a los anteriores gobiernos el apoyo de una oligarquía influyente y poderosa, se vió obligado a extremar el sistema restrictivo para mantenerse en el poder. Es un hecho histórico que después de 1857 el Gobierno de Montt no contaba ni con mucho con la adhesión de la mayoría del país.

En principios religiosos los nacionales se encontraban divididos, pues contaban entre sus filas a católicos fervorosos y a librepensadores declarados; pero los accidentes de la lucha teológica entablada colocaba al partido bajo un aspecto que para las conciencias timoratas tenía poco de ortodoxo.

En cuanto a los liberales vencidos en Loncomilla, conocemos ya los principios de que habían hecho profesión de fe, principios que, por otra parte, no eran muy definidos en la mayoría de ellos. Como los asuntos teológicos no formaban aún parte de su programa, el liberalismo no se creyó en el caso de hacer cuestión doctrinaria del conflicto de la

autoridad civil con la eclesiástica, mientras que, por otra parte, su situación de enemigo irreconciliable del Gobierno, le inclinó a buscar la alianza del clero y a simpatizar con la causa del arzobispo.

Tal fué el origen del famoso movimiento llamado la fusión: esto es, el pacto de todos los opositores contra el enemigo común. Los que combatieron a Montt desde antes de Loncomilla y sus adversarios nuevos tenían intereses análogos y no estaban separados por verdaderas cuestiones de doctrina. En efecto, como ya hemos tenido ocasión de ver, para la mayoría de los llamados liberales de 1849, en el gran duelo a que dió origen la candidatura de Montt, más que un verdadero antagonismo de opiniones, había existido una guerra de predominio; enemigos encarnizados de su gobierno estaban en el caso de entenderse con la fracción pelucona disidente en 1857, cuyo autoritarismo estaba considerablemente relajado desde que de gobiernista se había convertido en opositora.

Firmóse, pues, la *fusión liberal-conservadora*, según se dice, en los salones del Palacio Arzobispal. Nos equivocáramos si viésemos en esta alianza algo parecido a las coaliciones y pactos del día; los intereses y los propósitos de los opositores de 1849 eran idénticos a los de los opositores de 1856 y 1857; separábalos una cuestión de nombre y ambos sólo querían derribar a Montt y poner en lugar de su gobierno, otro que, sin chocar con las formas antiguas consagradas en 1830, iniciara una política conciliadora. Así, no es extraño que liberales y conservadores se confundieran en los años que siguieron, hasta el punto de que no era posible en la mayoría de los casos saber si un fusionista pertenecía a uno u otro de los partidos fusionados sino acudiendo a la fecha de su antagonismo contra Montt. Los dos grupos pelucones separados en 1849 y 1857 formaban, pues, un solo partido.

No todos los liberales aceptaron la fusión. Había muchos de ellos que sinceramente profesaban los principios de exal-

tado republicanismo y de reforma constitucional adoptados por la juventud liberal en el segundo período de la administración Bulnes. Repugnaba a estos hombres la alianza con los conservadores, en la cual sólo veían un retraso para la aplicación de los principios con que creían regenerar a la República. Estos liberales que después formaron lo que se llamó el radicalismo, sin poner obstáculos serios a la nueva combinación política, la siguieron sin entusiasmo o se separaron con disgusto.

Deslindados así los campos de los partidos, la oposición contra el gobierno de Montt se vió bastante poderosa para abrir contra él una campaña de resistencia constitucional que debía convertirse muy luego en revolución armada. El Senado, en el cual dominaban los conservadores disidentes, negó al Ministerio la ley que autoriza el cobro de las contribuciones; esto equivalía a poner al Presidente en el caso de salirse de las formas legales o de someterse a las exigencias de sus adversarios. Don Manuel Montt, a cuya incontestable energía se aunaba un sincero y religioso respeto por el orden constitucional, de cuya veneración había hecho el objeto principal de su vida, no desmintió en tan difíciles circunstancias las doctrinas que siempre había profesado, adoptando una noble actitud que, desgraciadamente, no siempre encontró imitadores en el porvenir.

Presentó, pues, al Senado la renuncia del elevado puesto a que lo había llevado el voto de sus conciudadanos, declarando que, viéndose en la imposibilidad de gobernar según los principios de su vida entera, principios que, en su concepto, eran los únicos que podían hacer la felicidad del país, se veía en el caso de retirarse dejando "a otros que asumieran ante Dios y la patria la tremenda responsabilidad de violar las instituciones".

Impresionados los senadores por esta actitud, retrocedieron en presencia de tan grave conflicto. Hiciéronse tentativas de arreglo, y un Ministerio de conciliación logró apaciguar los ánimos por algún tiempo.

La calma no fué de larga duración, y el nuevo Ministerio fué luego impotente para apaciguar las pasiones. Un rico minero de Copiapó, don Pedro León Gallo, pariente y antiguo partidario de Montt, pero entregado ya por entonces a las ideas del más exaltado liberalismo, inició en Copiapó un levantamiento contra las autoridades constituídas. La oposición apoyó en un principio con entusiasmo la revolución, pero vencedor Gallo en la batalla de los Loros, los magnates de Santiago se sintieron sobrecogidos ante la perspectiva del triunfo de un caudillo cuyos avanzados principios políticos y religiosos temían más aún que la supremacía de Montt. La revolución fué, pues, vencida, no sin que la sangre derramada, y las enérgicas medidas adoptadas por el Gobierno en contra de sus adversarios, hubieran llevado al extremo la exacerbación de los ánimos y el odio encendido en una gran parte del país contra el Presidente y sus partidarios.

La República se encontraba, pues, en una situación de las más falsas, y todo hacía esperar nuevas explosiones. El Gobierno, sostenido por una minoría evidente, se mantenía sólo por obra de las medidas de rigor, ya que tenía en su contra no sólo a sus antiguos adversarios, sino también a sus antiguos amigos, al clero, a la gente devota, a la aristocracia y al liberalismo. Sólo la fuerza de las instituciones conservadoras le permitía mantenerse en pie en medio de aquella deshecha tempestad.

IX

ABDICACION DEL MONTTVARISMO.—PRESIDENCIA DE PEREZ.—EL REFORMISMO

Dados los hábitos electorales del país, que colocaban a las urnas bajo la exclusiva voluntad del Poder Ejecutivo, el gobierno no podía ser recmplazado por los medios legales, sino, o por una abdicación voluntaria, o por una revolución.

El candidato natural de los nacionales para la Presidencia de la República era don Antonio Varas, Ministro y principal cooperador de Montt, con quien le unían los lazos de una antigua amistad y de una noble gratitud.

Vencedor el gobierno de la revolución de 1859, no se divisaban mayores obstáculos para que esa candidatura triunfase, consagrándose así por mayor tiempo la supremacía de su partido. Sin embargo, la tirante situación del país no permitía esperar, en tales circunstancias, un gobierno fecundo, sino, por el contrario, una era de odios y de represiones violentas.

El ilustre Varas aceptó con patriótico desprendimiento el triste deber que le señalaban las circunstancias; su personalidad demasiado acentuada y decisiva en las ásperas

luchas de la administración que terminaba, lejos de aplacar la tormenta hubiera redoblado sus iras. Renunció, pues, una candidatura de seguro éxito que le habría llevado a un puesto muy elevado pero lleno de peligros y de amargas responsabilidades. A la continuación de la guerra contra una gran parte del país, prefirió su abdicación que llevaba envuelta la de su propio partido. El triunfo contra la revolución fué así la última salva de honor, disparada en pro del orden y de la solidez de las instituciones; llegaba la hora de abandonar con gloria y según las formas de las leyes, una dominación casi imposible.

Ante la renuncia de Varas, el partido nacional designó como candidato a la Presidencia a don José Joaquín Pérez, antiguo pelucón que se había conservado fiel al gobierno en el conflicto de 1857. Hombre de buen sentido y conciliador, Pérez no había retrocedido, sin embargo, ante la severidad de las medidas que la política del decenio se vió obligada a adoptar para mantenerse en el poder. Pero su personalidad algo opaca y la conocida bondad de su carácter no permitían temer para su candidatura resistencias demasiado enérgicas.

La circular en que se hizo la proclamación del nuevo candidato, puede decirse que fué el último documento histórico, que reproducía el lenguaje del antiguo conservantismo; la necesidad de mantener el orden público y la pureza del régimen constitucional de 1833, resistiendo a las pretensiones de reformas prematuras, es el propósito que se refleja en aquella pieza que tenía ya los caracteres de un testamento.

La elección de Pérez fué acogida por el país con evidentes muestras de entusiasta simpatía. Desde el primer momento, los políticos de oposición rodearon al nuevo Presidente, halagando sus propósitos conciliatorios, con la fundada esperanza de que ante semejantes manifestaciones de la opinión, introdujera en los rumbos políticos un cambio desfavorable a los hombres del anterior decenio. Hasta qué

punto estas manifestaciones auxiliaron propósitos que bien pudieron ser preconcebidos en el señor Pérez, es cosa que no puede afirmarse con seguridad. El hecho es que desde el primer día pudo verse claramente que el nuevo gobierno adoptaría tendencias muy opuestas a las de su predecesor. Ello estaba más en la lógica de las cosas que en la voluntad del Primer Magistrado, y es tiempo ya de que la justicia histórica, dando a cada cual lo que le pertenece, borre de la memoria de Pérez, el estigma de traición que le arrojaron entonces los que si bien le habían elevado al poder, debieran estar resignados de antemano a las consecuencias de una abdicación que el estado de los ánimos hacía inevitable.

Después del opaco e incoloro Ministerio de don Manuel Alcalde, que no quiso o no pudo contentar a las facciones encontradas, el Presidente Pérez, incapaz de conciliar los enconados odios abiertos por la guerra civil de 1859, y por las ásperas represiones del decenio, se vió en el caso de decidirse francamente o por la política y los hombres del Gobierno de Montt o por la fusión opositora. Lo primero no era posible por las mismas razones que habían aconsejado la renuncia de don Antonio Varas; Pérez tuvo, pues, que optar por la segunda.

Quedaba un tercer camino; la reconstitución del partido conservador en su forma antigua, pero para los hombres son un abismo demasiado grande, los odios del día de ayer, abismo que no son capaces de llenar los gloriosos y antiguos recuerdos. Las pasiones religiosas y las enconadas resistencias constituían un obstáculo demasiado grande para la realización de aquel gran pensamiento.

Don Manuel A. Tocornal, representante genuino y ya casi único del antiguo espíritu de los pelucones, fué llamado a organizar el Ministerio fusionista, ante la imposibilidad de acometer una obra, que él personalmente hubiera deseado realizar, pero que no intentó siquiera por las impe-

riosas exigencias de los tiempos. El partido nacional quedó así francamente en la oposición.

El nuevo gobierno contaba con el apoyo de gran parte de la aristocracia conservadora, con el clero y el liberalismo vencido en Loncomilla. Sintiéndose fuerte en la opinión, pudo, sin tropiezo, inaugurar una época de paz y de conciliación, acaso no tan fecunda en labor administrativa, como el anterior decenio, pero, sin duda alguna, mucho más popular.

Hemos recordado anteriormente la actitud de un grupo de liberales que desde los primeros momentos se había resistido a la fusión, en nombre de la pureza de su credo democrático y republicano. Aquel grupo, pequeño en número, pero notable por la rigidez espartana de sus principios liberales, fué el núcleo del partido radical, cuya organización definitiva se efectuó en los precisos momentos en que el fusionismo arribaba al poder; eran los irreconciliables, y sus doctrinas no eran sino la aplicación extrema de los principios de igualdad, de democracia y de parlamentarismo proclamados por la juventud liberal de 1849. Este partido negó su apoyo al gobierno y se manifestó desde los primeros momentos en una actitud de recelo y hostilidad.

En semejantes condiciones, nada más natural que la unión o alianza de los dos partidos de oposición, esto es, de los radicales y nacionales, cualquiera que fuese el abismo que separaba sus principios, representando los unos el régimen autoritario y los otros la exageración de las doctrinas liberales. Pero por una parte los partidos de oposición no se encuentran jamás demasiado inclinados a sostener con rigidez la omnipotencia de los gobiernos, y por la otra los caracteres de la lucha que iba a entablarse, mucho más religiosa que política, ponían en notable acuerdo los intereses de los patronatistas de 1857 y los de los librepensadores del radicalismo.

En efecto, para combatir la dominación del fusionismo,

no sólo era necesario remover los inmensos obstáculos que dentro de nuestro antiguo sistema político, suscitaba la incontrastable influencia del gobierno, sino también debilitar o neutralizar el poder del clero que con todas sus fuerzas servía entonces la misma causa. En todos los departamentos la alianza del gobernador y del cura, levantaba una inexpugnable barricada a los propósitos electorales de la oposición.

Un diluvio de propagandistas anticlericales se descolgó sobre la católica población de Chile. En libros, en folletos, en periódicos serios o burlones, se ridiculizaba y atacaba sin piedad al arzobispo y a sus secuaces, al gobierno y al dogma. La juventud monttvarista educada en las horas del conflicto eclesiástico no vacilaba en coadyuvar eficazmente a la obra de los radicales.

Si faltó la moderación en estos ataques, no fué mucho más prudente la defensa; el clero, en su totalidad, se declaró enemigo irreconciliable de los opositores, sin distinguir entre ellos a los adversarios políticos de los adversarios religiosos. Se hacía en el púlpito propaganda de partido, se pretendía aniquilar a la prensa de oposición con excomuniones y censuras eclesiásticas, procurando privarla por estos medios de avisos y suscriptores. Sin limitarse a la defensa del dogma y de las enseñanzas de la iglesia, el clero atacaba a las personalidades, y en el calor de la pelea, no comprendía cómo se iba minando su prestigio y aniquilándose su salvadora influencia moral.

Estos debates fueron así subiendo de tono y creciendo en irritación con el transcurso del tiempo. Las cuestiones constitucionales que antes dividían los partidos eran ya de segundo término. Las disputas religiosas; las palabras ultramontanismo, jesuitismo, herejía y librepensamiento, reemplazaron, poco a poco, a los problemas de otro tiempo, en un país ávido de novedades y cuyas creencias se quebrantaban con celeridad pasmosa.

Dentro del fusionismo, muchos no miraban con buenos

ojos la actitud del clero; pero casi todos toleraban el concurso que él les prestaba en política. Difícilmente se reprobaba aquello que nos auxilia. ✓

En 1868, la lucha religiosa se encontraba en el período de su mayor irritación; y causa verdadera sorpresa el inmenso cambio que se había operado en los tres años transcurridos desde 1865, cuando con ocasión de la reforma que consagró la tolerancia de cultos, si alguien atacó la intransigencia que se atribuía al clero, la religión casi se había visto por entero exenta de ataques. Después, la guerra de España calmó casi por entero la exaltación de la política; pero sólo para que ésta volviera a estallar luego con más fuerza.

El ostracismo de los nacionales no fué en un principio acompañado de represalias violentas; la moderación y la cultura de Tocornal supieron conservar con los caídos una actitud en cierto modo respetuosa. Más tarde, el apetito de represalias tomó mayor fuerza, en forma de destituciones y exclusiones sistemáticas en el personal administrativo.

Pero, para borrar por entero las huellas del decenio en el gobierno del país, se presentaba como un obstáculo la constitución del poder judicial, que siendo inamovible y gozando de cierta independencia, no estaba al alcance de los exoneradores del fusionismo. La Corte Suprema de Justicia, presidida por don Manuel Montt, se componía, en casi su totalidad, de miembros caracterizados del partido nacional; sobre ella había, pues, de caer con toda su fuerza el encono de sus adversarios.

Un diputado de la mayoría, don Vicente Sanfuentes, propuso en la Cámara la acusación de la Corte Suprema ante el Senado, en virtud de una serie de cargos formulados, más que por un espíritu justiciero, por las malsanas sugerencias de la pasión. El golpe era tan audaz, que el mismo Gobierno se sintió, por un momento, sobrecogido.

Los más exaltados miembros del fusionismo aplaudieron

y empujaron la obra de la acusación, los de espíritu más tímido o más sereno, se abstuvieron o manifestaron su franca reprobación; el Ministro del Interior que lo era el señor Vargas Fontecilla, presentó su renuncia, el Presidente Pérez se declaró neutral. En general, los gobiernistas cuyo liberalismo era más o menos acentuado y a quienes repugnaba ya la alianza con los elementos clericales, vieron en el proyecto del diputado Sanfuentes, un abismo más, próximo a abrirse entre ellos y los elementos de oposición, con cuyas tendencias comenzaban a simpatizar. Por razones del todo opuestas, los conservadores y el clero se colocaron a la vanguardia de los acusadores. Esta fué, pues, la primera crisis de la fusión; un nuevo grupo de liberales se unió a los radicales, abandonando las filas de gobierno y engrosando las de la oposición.

Apenas es posible darse una idea de las terribles pasiones provocadas por aquel lamentable episodio de nuestra vida pública. Los ataques contra el Gobierno de Pérez recrudecieron en violencia y sus enemigos pudieron tomar el aspecto de víctimas, siempre simpático para las multitudes. Como ya iba haciéndose costumbre, se atribuyó al clero y a las sugerencias del Arzobispo Valdivieso, un acto que parecía significar el desquite de 1857.

La acusación, triunfante en la Cámara de Diputados, naufragó, no obstante, en el Senado; la digna actitud de aquella Corporación evitó al Gobierno de Pérez, la mancha de una atropelladora injusticia.

Aquella derrota de la fracción intemperante del fusio-nismo, tuvo por resultado, fácil de prever, un debilitamiento manifiesto de los clericales en la administración. El Gabinete Amunátegui, representante de una política conciliadora, casi liberal, fué el primer efecto de esta evolución, cuya importancia era imposible prever entonces.

Entretanto, la oposición se había fortalecido y prestigiado; la bandera de la reforma política y las tendencias anticlericales del radicalismo, habían contagiado a sus alia-

dos los nacionales, en quienes el alejamiento del poder bastó para destruir en pocos años el amor que antes profesaron al principio de autoridad y a las instituciones de 1833; fenómeno antiguo y constante en todas las oposiciones. Los liberales, separados del Gobierno, alzaron idéntica bandera y la propaganda de los principios de reforma se reanudó con creciente actividad.

Las doctrinas revolucionarias de 1849 volvieron a estar en boga. Ahora, como entonces, se discutían las instituciones consagradas por el éxito y la experiencia en nombre de principios abstractos y de figuras de retórica. Las libertades de los pueblos, la democracia, la ampliación del derecho de sufragio, la independencia de los poderes, el parlamentarismo y el debilitamiento de la autoridad del Presidente de la República, tales eran las antiguas y nuevas aspiraciones del reformismo. La juventud las acogía con entusiasmo, ya que educada bajo el régimen pelucón, desconocía los males de la anarquía, y, en el porvenir, cuyos tristes secretos escapaban a su inexperiencia, imaginaban una era de prosperidad y de gloria, siguiéndose a la realización de tan seductoras quimeras. Se creía que todos los males presentes y futuros serían curados por el poder mágico de aquella libertad, única diosa entonces del pensamiento. Hoy es preciso no reír ni burlarse de los candores de esos tiempos; los jóvenes de entonces no habían tenido, por fortuna suya, la ocasión de ver de cerca a la diosa; la inocencia es respetable y debemos respetarla.

El movimiento reformista de 1870 se diferenciaba del de 1849, en que ahora el liberalismo añadía a sus primeras tendencias, cierto espíritu de independencia religiosa y de hostilidad al clero, que le permitía alcanzar prosélitos aún entre personas que, mal preparadas para comprender las teorías políticas, son incapaces de sentir otra clase de convicciones que las que se derivan de las creencias religiosas o antirreligiosas.

En efecto, no puede dudarse que la razón principal de

la extraña predilección que sienten algunos países por las luchas teológicas, hasta el punto de que los partidos fundados en ellas son los únicos que tienen raíces en el espíritu y las convicciones del vulgo es la de estar dichos problemas más al alcance de todas las ignorancias, y prestarse mejor al desarrollo de las pasiones agresivas propias de las gentes poco ilustradas. Las doctrinas sobre equilibrio de poderes, sobre organización política y social, no son ni pueden ser objeto de predilecciones o antipatías en la masa común de las democracias, que no entienden ni pueden apasionarse por estas materias demasiado áridas y complejas. El tener opiniones sobre ellas es un privilegio de los más cultos. Que se hable a las masas del sistema parlamentario, de las ventajas del sufragio libre, de las teorías del gobierno democrático, y probablemente se perderá el tiempo; enséñesele, por el contrario, a escarnecer una sotana y a burlarse de un dogma, y se tienen grandes probabilidades de adquirir prosélitos. Otro tanto sucede con los partidos afectos a la religión. Un conservador de temple antiguo gastaría inútilmente su elocuencia propagando en el pueblo las ventajas de la estabilidad política y la necesidad de fortalecer el poder, para evitar los desbordes del desquiciamiento y la anarquía; correría el riesgo de no ser entendido o, por lo menos, de no apasionar a su auditorio, y lo lograría, al contrario, si mostrara ante un pueblo devoto, a sus adversarios como enemigos de sus creencias, como herejes reprobados por la Iglesia, a quienes es preciso aniquilar y destruir. El sentimiento y no la doctrina, la facultad agresiva y no la facultad razonadora, tales son los resortes de la popularidad en el sistema democrático. Por eso, cuando un país poco preparado para la práctica de las instituciones libres, entra por el estéril y peligroso camino de las luchas religiosas, es muy dificultoso hacerle tomar otro más fecundo y racional. Por eso también el liberalismo había encontrado, al fin, el más seguro camino para sus futuros y ya cercanos éxitos de popularidad y predominio.